

*REPÚBLICA DE COLOMBIA*



*RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD*

Bogotá D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

**Habeas Corpus**

**Radicado 2021-0676.**

**ASUNTO A TRATAR**

Procede el Despacho a resolver sobre la Acción Pública de Habeas Corpus, promovida por el ciudadano DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO identificado con C.C. 1.023.947.215.

**HECHOS**

A manera de resumen el accionante manifiesta que fue condenado a la pena principal de 54 meses de prisión y a la fecha octubre 12 de 2020 lleva 45 meses físicos, porque la fecha de su captura fue el 21 de enero de 2016, por lo que considera lleva más tiempo del que corresponde.

En consecuencia, solicita su libertad.

**ACTUACION DEL DESPACHO**

Por auto de fecha 13 de octubre del presente año, se admitió la solicitud de HABEAS CORPUS, y con la finalidad de investigar y determinar los hechos planteados, se ordenó la vinculación en las presentes diligencias Ordenar la vinculación en las presentes diligencias a la OFICINA JURÍDICA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA y al JUZGADO DIECISIETE DE EJECUCIÓN DE PENAS DE BOGOTÁ Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD, a fin de que se pronuncie sobre lo que es materia la presente acción en el término de dos (2) horas, así como se ordenó oficiar a LA CARCEL LA PICOTA, para que en el mismo término informaran cuando ingresó el señor DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO identificado con C.C. 1.023.947.215 y por cuenta de que autoridad, enviando los correspondientes oficios.

### **RESPUESTAS DE AUTORIDADES.**

El Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, indicó que el 12 de Noviembre de 2015, el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C., condenó al señor DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO, a la pena principal de 54 meses de prisión, y accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal, luego de encontrarlo responsable del delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE ILEGAL ARMAS O MUNICIONES; decisión de instancia en la que le fue negado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y concedió el sustituto de la prisión domiciliaria.

Afirman que el sentenciado fue inicialmente privado de la libertad el 29 de marzo de 2016, siendo favorecido con el sustituto de la prisión domiciliaria. En auto de fecha 20 de febrero de 2019 se dispuso iniciar el traslado del que habla el artículo 477 del Código de Procedimiento Penal en razón al informe de notificador de estos Juzgados que daba cuenta que el penado no fue hallado en su domicilio; posteriormente, se dispuso realizar visita de control al sentenciado y labores de vecindario.

Indican que en auto del 20 de mayo de 2020 dicho Despacho dispuso revocar el sustituto de la prisión domiciliaria en otrora concedida al penado, siendo requerido para el cumplimiento de la pena restante, decisión que conoce el penado como quiera que fue interpuesto recurso de reposición contra aquella; por lo que este Juzgado en auto del 5 de julio de 2019 no repuso la misma.

En el referido auto de revocatoria del sustituto de la prisión domiciliaria frente al cumplimiento de la pena del sentenciado se expuso: “ (...) *el sentenciado DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO estuvo privado de la libertad por cuenta de las presentes diligencias desde el 29 de marzo de 2016 (fecha de captura), hasta el 11 de diciembre de 2018 (fecha del primer incumplimiento del sentenciado), para un descuento físico de 32 meses y 27 días, que sumados a los 3 días de detención previa, da un descuento de 33 meses de la pena impuesta de 54 meses de prisión, lo que significa que le restan por cumplir 21 meses, siendo esta la pena que deberá descontar de manera intramural.*”

Debe quedar claro que el accionante actualmente no se encuentra actualmente privado de su libertad por cuenta de estas diligencias, siendo requerido mediante orden de captura para el cumplimiento de 21 meses de prisión, pena restante de los 54 meses de prisión a los que fue condenado. Bajo el convencimiento de que esta oficina judicial no se encuentra incurso en violación al derecho de la libertad del señor DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO, de manera respetuosa solicita se declare la improcedencia de la acción constitucional.

Por su parte el INPEC indicó que el señor DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO identificado con C.C. 1.023.947.215 ingresó a dicho establecimiento carcelario el 21 de enero de 2016 por cuenta del Juzgado 17

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, condenado a 54 meses por el Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad.

Aducen que el ciudadano ingreso nuevamente al centro penitenciario el día 17 de enero de 2021 por revocatoria de domiciliaria, no figurando solicitudes de redención de pena por parte del accionante y que a la fecha no obra petición alguna por parte del interno pendiente por resolver, así como no han recibido boleta que ordene la libertad.

El Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Oral Acusatorio de Paloquemao, señaló que el CUI 110016001276201300037 N.I. 189129, dentro del cual el 20 de diciembre de 2014, el Juzgado 74 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, impartió legalidad a la captura realizada en contra de DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO Y OTROS, avaló la formulación de imputación que le hiciera la Fiscalía por el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO, cargos que no fueron aceptados por el imputado, y como quiera que la Fiscalía retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, el Despacho ordenó la libertad inmediata del antes mencionado, para lo cual se libró la respectiva boleta de libertad.

Igualmente indican que dentro del radicado originario, es decir el CUI 110016001276201300037 N.I. 189129, el 12 de mayo de 2015, se materializó Ruptura de la Unidad Procesal arrojando como nuevo CUI 110016000000201500478 N.I. 239681, para las actuaciones adelantadas en contra de DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO, proceso dentro del cual el 12 de noviembre de 2015, el Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, lo condenó por preacuerdo a la pena principal de 54 meses de prisión por el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO , negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena ,y en

su lugar concedió la prisión domiciliaria, previa caución por el valor de 2 smlmv, y suscripción de la respectiva diligencia de compromiso.

El 19 de enero de 2016, se libró por parte de esta Oficina Administrativa Boleta de Detención Domiciliaria en contra de DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO, con Destino a la Penitenciaría La Picota, a fin de que cumpla la pena impuesta por el Juzgado 54 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. EL 8 de marzo de 2016, se remitió ficha técnica por competencia a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, proceso que actualmente está conociendo el Juzgado 17 de la misma especialidad, en el cual conforme a información que registra en la página de la Rama, el día 27 de julio de 2021, se negó la libertad por pena cumplida.

### **CONSIDERACIONES**

La Acción Pública de Habeas Corpus la consagra el artículo 30 de la Constitución Política, con el fin de tutelar la libertad personal, en los eventos en que alguien es capturado con violación de las garantías Constitucionales o legales, o cuando se prolongue ilegalmente la privación de su libertad.

Igual dispone el citado artículo que *“Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, norma superior cuyo desarrollo se produjo con la promulgación de la Ley 1095 del 2006, recalcando en su artículo 3-1 como una garantía de la persona afectada, para poderlo invocar ante cualquier autoridad Judicial Competente”*, dentro de las que por supuesto se encuentran los jueces de Familia del territorio Nacional, de suyo, cobrando legitimación el petente para escoger ante que autoridad eleva su pedimento de protección a sus garantías constitucionales, en ejercicio del factor objetivo de competencia.

El Habeas corpus en tanto acción constitucional y derecho fundamental que tutela la libertad personal se edifica o estructura básicamente en dos eventos, a saber: 1.- Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas o especies constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa, flagrancia, públicamente requerida y administrativa. 2.- Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley para que el servidor público lleve a cabo la actividad a que está obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o adopte la decisión que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del término).

Es de la esencia de esta acción de Habeas Corpus, proteger el derecho fundamental a la libertad inherente a los seres humanos; dando la posibilidad de que un Juez, evalúe la situación jurídica por la cual se encuentra privado de ella.

Jurisprudencialmente se ha dicho, que el Habeas Corpus “... es un recurso concebido para la protección de la libertad personal cuando de ella ha sido privada una persona ilegalmente (artículo 30 de la Carta Política). Esta garantía hace parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados Internacionales sobre derechos humanos, tales como el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 9º y 10º y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), artículos 7º y 8º ambos aprobados por la Ley 74 del 26 de diciembre de 1.978 (Diario Oficial No. 32682), razón por la cual no puede ser suspendida ni siquiera durante los estados de excepción, tal como lo señalan perentoriamente los artículos 93 y 214 de la Constitución Política”.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado insistentemente que: “...a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento,

*todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de Hábeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario. (...)*

*“Es que resulta inaceptable la existencia de dos medios judiciales alternativos para controvertir las decisiones que afectan la libertad, cuando tal como se ha venido insistiendo, existen los recursos legales ordinarios que garantizan la protección del derecho fundamental dentro del proceso penal.”<sup>[1]</sup>*

De igual manera señaló: “... El núcleo del hábeas corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, nadie duda que el hábeas corpus está por fuera de ese ámbito y pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención”<sup>[2]</sup>.

Así las cosas, debe recordar, que la acción de habeas corpus no es una figura alternativa o sucedánea para debatir aspectos que se deben confrontar en el respectivo proceso, pues se insiste, es una acción eminentemente de carácter supletoria, la cual solo procede ante la inexistencia de mecanismos directos de solución como son los trámites judiciales establecidos por el legislador para el proceso penal, de tal suerte que, ni siquiera el juez constitucional puede sustituir o desplazar al juez natural en el conocimiento de dichos asuntos, pues su competencia se circunscribe exclusivamente a la verificación de los aspectos formales que de alguna manera puede incidir en la afectación de la libertad como tal.

Respecto del fenómeno de la inmediatez del Hábeas Corpus y sus efectos, esto dijo la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal en reciente decisión<sup>[3]</sup>:

*“Es de advertir que en el debate suscitado en esta sede constitucional, se ha omitido el análisis de un aspecto fundamental: la actualidad de la situación generadora de una prolongación ilícita de la detención, como consecuencia necesaria del principio de inmediatez que caracteriza el Hábeas Corpus. En efecto, dada la naturaleza especialísima y extraordinaria de esta acción, a semejanza de lo que ocurre con la de Tutela (art. 86 Const. Pol.), la misma no constituye la herramienta jurídica idónea para sancionar o pretender solucionar hechos violatorios pasados o ya superados”.*

En nuestro caso, la privación ilegal de su libertad según el accionante, es porque ya ha purgado la pena que se le impuso, por cuenta del Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad de 54 meses, pues esta privado de la libertad desde el 21 de enero de 2016.

Debe advertirse que, en el proceso seguido contra DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO identificado con C.C. 1.023.947.215, ante el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, profirió sentencia el 12 de noviembre de 2015, condenándolo a la pena principal de 54 meses de prisión por el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE ILEGAL ARMAS O MUNICIONES;, negándosele el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria y como la misma no fue objeto de recursos cobro ejecutoria.

Afirmó el Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que el condenado DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO identificado con C.C. 1.023.947.215, el sentenciado fue inicialmente privado de la libertad el 29 de marzo de 2016, siendo favorecido con el sustituto de la



prisión domiciliaria. En auto de fecha 20 de febrero de 2019 se dispuso iniciar el traslado del que habla el artículo 477 del Código de Procedimiento Penal en razón al informe de notificador de estos Juzgados que daba cuenta que el penado no fue hallado en su domicilio; posteriormente, se dispuso realizar visita de control al sentenciado y labores de vecindario, por lo que por auto del 20 de mayo de 2020 revocaron el sustituto de la prisión domiciliaria en otrora concedida al penado, siendo requerido para el cumplimiento de la pena restante, decisión que conoce el penado como quiera que fue interpuesto recurso de reposición contra aquella; por lo que este Juzgado en auto del 5 de julio de 2019 no repuso la misma.

Se tiene que en el referido auto de revocatoria del sustituto de la prisión domiciliaria frente al cumplimiento de la pena del sentenciado dicho estrado judicial expuso: “ (...) *el sentenciado DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO estuvo privado de la libertad por cuenta de las presentes diligencias desde el 29 de marzo de 2016 (fecha de captura), hasta el 11 de diciembre de 2018 (fecha del primer incumplimiento del sentenciado), para un descuento físico de 32 meses y 27 días, que sumados a los 3 días de detención previa, da un descuento de 33 meses de la pena impuesta de 54 meses de prisión, lo que significa que le restan por cumplir 21 meses, siendo esta la pena que deberá descontar de manera intramural.*”

Así las cosas, queda claro que el accionante actualmente no se encuentra actualmente privado de su libertad, toda vez que fue nuevamente requerido con orden de captura para el cumplimiento de 21 meses de prisión, pena restante de los 54 meses de prisión a los que fue condenado.

Los cuestionamientos acá formulados por el accionante, no son de recibo en esta instancia judicial, pues su situación jurídica se encuentra definida por autoridad Judicial con competencia, en consideración a que debe continuar privado de la libertad, pues no ha cumplido la totalidad de la pena que le fuera

impuesta, según lo consideró, donde no le es dable al juez que conoce del habeas corpus, refutar dichas consideraciones.

Ahora, el despacho encuentra que el penado se encuentra por cuenta del Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, autoridad ante la cual, como lo ha venido haciendo el peticionario, elevar las solicitudes que tengan relación con el beneficio de libertad y no a través de este mecanismo constitucional, pues, esta acción no sustituye el trámite del proceso ordinario, luego se le recuerda al accionante que llegado el caso de considerar que se encuentra privado ilegalmente de su libertad, deberá suscitar dicho pedimento, en primer turno ante el funcionario ejecutor, en este caso al Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, funcionario judicial que le corresponde controlar la pena que le fue impuesta por parte del Juzgado Catorce Penal Municipal de conocimiento de esta ciudad en sentencia del 16 de marzo de 2016 por el delito de Hurto Calificado y agravado y después si acudir al mecanismo que hoy se invoca.

Así las cosas sobre el punto específico de la privación de la libertad tenemos: Que la internación penal del accionante obedece a una sentencia producto de una conducta típica descrita y sancionada dentro de nuestro ordenamiento jurídico sobre la que se vio incurso, cuyo procedimiento se dio con el lleno de los requisitos que para tal fin exige la norma, por lo cual se encuentra condenado por el Juzgado Cuarenta Penal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, faltándole 21 meses de prisión, conforme lo indicó el mencionado Juez Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, razón por la cual no puede decirse que esta privado ilegalmente de su libertad.

En síntesis, se despachará adversamente el hábeas corpus impetrado, toda vez que quedó descartada la violación de la garantía constitucional y legal alguna, y como quiera que tampoco se vislumbra en lo más remoto privación o

prolongación ilícita de la libertad en el caso concreto del penado DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO identificado con C.C. 1.023.947.215, con ocasión de la actuación surtida por el Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad.

Por lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, D.C.,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** **DENEGAR** la acción pública de HABEAS CORPUS promovida por el ciudadano DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO identificado con C.C. 1.023.947.215, de acuerdo con las premisas sentadas a lo largo de esta providencia.

**SEGUNDO:** NOTIFIQUESE esta decisión al accionante DEIBID ARMANDO RODRIGUEZ MORENO identificado con C.C. 1.023.947.215, por el medio más expedito, haciendo saber que la presente decisión puede ser impugnada dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la ley 1095 de 2006.

**TERCERO:** Igualmente comuníquese lo aquí decidido al JUZGADO DIECISIETE DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD y a LA CARCEL LA PICOTA. Ofíciase.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

**CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ**

## JUEZ

[\[1\]](#) Sala de Casación Penal, 19 de marzo de 2009, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán, Rad. 31484.

[\[2\]](#) Auto 25 de enero de 2007, exp. 26.810, sent. 27 de septiembre de 2000 exp. No. 14.153).

[\[3\]](#) Radicado 44926, del 28 de octubre de 2014.